

40 años de reformas en el Poder Judicial de la Federación

Francisco Ramos Quiroz*

Resumen:

El poder judicial federal en México experimentó una transformación profunda desde finales del siglo XX que lo acercó a la justicia constitucional, la cual cobró relevancia desde principios de siglo con el surgimiento en Europa de los llamados tribunales constitucionales. En América Latina a mediados de la década de los cuarenta comenzaron a establecerse órganos afines a los tribunales constitucionales, con lo que el tema de la defensa de la Constitución se fue posicionando poco a poco; no obstante, en México esto no empezó a proyectarse hasta 1987, año en que comenzaron a realizarse reformas a la Constitución que buscaron equipar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un tribunal constitucional, lo cual se logró de forma contundente con la reforma de 1994 y siguió consolidándose mediante otras reformas posteriores.

Abstract:

The federal judiciary in Mexico underwent a profound transformation from the late 20th century onward, bringing it closer to constitutional justice, which gained prominence at the beginning of the 21st century with the emergence of constitutional courts in Europe. In Latin America, similar bodies to constitutional courts began to be established in the mid-1940s, gradually raising the profile of constitutional protection. However, in Mexico, this did not begin to take hold until 1987, when constitutional reforms began to equip the Supreme Court of Justice of the Nation with a constitutional court. This was decisively achieved with the 1994 reform and continued to be consolidated through subsequent amendments.

Sumario: Introducción / I. La justicia constitucional y sus primeros pasos en México / II. La reforma constitucional de 1994 / III. Reforma constitucional de 1996 en materia electoral / IV. Las reformas constitucionales de 2011 / V. Reforma constitucional de 2024 / Fuentes de consulta.

* Profesor-Investigador de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadores (SNII).

Introducción

Una de las actividades más importantes para cualquier sociedad guarda relación con la justicia y su aplicación a los casos concretos, lo que se traduce en el quehacer de los jueces, que con frecuencia deben transformarse para cumplir mejor su misión en beneficio de la comunidad. La segunda década del siglo XX atestiguó el nacimiento de la Alta Corte Constitucional en Austria,¹ con lo cual el mundo avanzó de forma veloz hacia la judicialización de las cuestiones de mayor prioridad en un Estado, como las constitucionales. De esta forma. Se transitó hacia una forma de resolución de estos asuntos diferente de las que se habían experimentado desde el siglo pasado, pues por una parte se creó un órgano diverso de los tres poderes existentes, como son el Legislativo, Ejecutivo y Judicial; y por otra, este nuevo órgano tendría una naturaleza jurisdiccional. A la postre, estos órganos que fueron multiplicándose llegaron a ser nombrados de forma genérica tribunales constitucionales. El genio jurídico detrás de la creación de estas nuevas instituciones fue Hans Kelsen, quien las justificaba refiriendo que sería una ingenuidad política creer que el parlamento anularía una ley aprobada en atención a que otra instancia la hubiera declarado inconstitucional, por lo que debía ser un órgano diferente de éste y de cualquier otra autoridad estatal el que se encargara de declarar la anulación de los actos por inconstitucionalidad, naciendo así la idea de un tribunal constitucional.²

Este tipo de tribunales fue ganando terreno en todo el mundo y América Latina no fue la excepción, pues en las décadas posteriores comenzaron a establecerse órganos similares con algunas variantes. Por ejemplo, en Ecuador se estableció el Tribunal de Garantías Constitucionales en su Constitución de 1945; en Guatemala se previó una Corte de Constitucionalidad en 1965 y en Chile se creó un tribunal constitucional en 1971, por citar algunos.

Mientras que en México a principios de la década de los ochenta apenas comenzaban a escucharse voces que sugerían realizar reformas a la legislación para avanzar hacia la adopción de medios de defensa de la Constitución de tipo jurisdiccional, más allá del amparo que era la única institución de esa naturaleza, lo que evidenciaba la necesidad de tomar cartas en el asunto, lo

¹ Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia en México”, p. 244.

² Hans Kelsen, *La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia constitucional)*, p. 490.

cual comenzó a realizarse hasta finales del siglo XX a partir de la reforma constitucional de 1987, que fue un parteaguas en la materia.

Sin embargo, México no estableció un órgano nuevo para atender los temas de constitucionalidad, por el contrario, realizó una serie de reformas encaminadas a fortalecer el carácter de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de constitucionalidad, asimilándola a un tribunal constitucional, lo cual incluso llegó a generar cierta polémica al respecto, pues aunque la mayoría de autores, sobre todo mexicanos, consideran que sí debe considerarse a la Corte mexicana como un tribunal constitucional, al menos en sentido material; existen algunas voces que opinan lo contrario, como el caso del destacado constitucionalista peruano Domingo García Belaunde, quien considera que no debe imputársele el carácter de tribunal constitucional a la Suprema Corte mexicana, pues en realidad se trata de una corte ordinaria con prevalente función constitucional.³

Consideramos que más allá de esa discusión, posiblemente baladí, resulta completamente pertinente la opinión de Víctor Bazán, quien refiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación “experimentó una metamorfosis funcional en cuyo grado actual de evolución puede apreciarse que ha absorbido primordialmente la competencia en materia constitucional, acercándose materialmente a un órgano jurisdiccional especializado sobre el particular, sin perjuicio de conservar algunas competencias de mera legalidad ordinaria”.⁴

Por lo que en este trabajo abordaremos las reformas que en los últimos 40 años han operado en México en materia del Poder Judicial de la Federación, con especial referencia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales han permitido una transición en ésta, para convertirse en el órgano defensor de la Constitución, asumiendo en la práctica la alta responsabilidad de fungir como un tribunal constitucional.

I. La justicia constitucional y sus primeros pasos en México

En este apartado revisaremos en qué consiste la justicia constitucional y abordaremos los primeros pasos que dio el Estado mexicano en ese sentido a fi-

³ Domingo García Belaunde, “De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional”, p. 326.

⁴ Víctor Bazán, *Jurisdicción constitucional y control de constitucionalidad de los tratados internacionales un análisis de derecho comparado*, p. 12.

nales del siglo XX. Para ello es necesario comenzar por definir qué podemos entender por Constitución, pues desde finales del siglo XVIII la humanidad transitó hacia una concepción distinta de ésta, surgiendo así la idea de Constitución entendida como un texto que establece los elementos más importantes para el Estado, esto en el contexto de acontecimientos tan importantes como la Independencia de Estados Unidos de América y la Revolución Francesa, de donde surgieron las primeras constituciones que marcaron la pauta en la materia. Hasta la fecha sigue vigente aquel postulado de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 cuyo artículo 16 señalaba que la sociedad en la que no estuviera establecida la garantía de los derechos ni la separación de poderes, carecía de Constitución, surgiendo así los dos grandes sectores que la integran y que se fueron consolidando en los años posteriores: derechos humanos y división de poderes.

De modo que al reconocerse la existencia de la Constitución como una norma escrita que establece las bases del Estado, ésta se consolidó como el fundamento del mismo y emergió el carácter supremo de la Constitución, al punto de considerarla como la *lex superior*, en términos de Eduardo García de Enterría, para quien este nuevo texto no es simplemente una norma, sino que se trata justamente de la primera y más importante de todas, pues es la ley superior por varias razones, entre ellas, porque define el sistema de fuentes formales del Derecho al ser la fuente de las fuentes, además de su pretensión de permanencia perpetua, pues posee una intención fundacional, lo cual la vuelve diferente de cualquier otra norma.⁵

Al contar con una norma de tal importancia para la vida del Estado, necesariamente comenzó la búsqueda por lograr mantenerla vigente y atender aquellos casos en los que su contenido fuera violado por alguna autoridad, surgiendo así conceptos como defensa de la Constitución, control constitucional o justicia constitucional, los cuales, aunque formalmente no son lo mismo, pues poseen matices diferenciadores, tienen en común la finalidad de mantener la correcta aplicación de la Constitución.

En las últimas décadas, las formas de mantener vigente la Constitución cobraron una importancia inusitada, al punto que bien puede pensarse en un Estado de derecho cuya Constitución descansa en 3 ejes: a saber: la división del poder, los derechos fundamentales y el control de la constitucionalidad.⁶ Este

⁵ Eduardo García de Enterría, *La constitución como norma y el tribunal constitucional*, pp. 49-50.

ejercicio de control guarda relación con la llamada justicia constitucional, que puede entenderse como: “una función estatal que implica la configuración de un mecanismo de defensa y garantía jurisdiccional de un orden político concreto articulado en una Constitución”.⁷

Es tal la importancia de la justicia constitucional, que en la actualidad los conceptos de Constitución llegan a hacer referencia a la misma como un elemento necesario, por ejemplo, para el español Manuel Aragón hoy en día resulta un lugar común en el pensamiento jurídico más solvente entender la Constitución como la norma jurídica suprema y jurisdiccionalmente aplicable,⁸ es decir, la justicia constitucional está presente en la idea misma de Constitución.

México es un país que ha mostrado una franca vocación constitucional, prácticamente desde antes de la Independencia, pues cuenta con diversas experiencias constitucionales desde el siglo XIX, por lo que ha experimentado variadas formas para mantener el orden constitucional a través de su historia. En términos generales puede decirse que nuestro país transitó de una forma de control constitucional de tipo político encomendado al poder Legislativo, con una fuerte influencia del constitucionalismo gaditano, a un sistema de control de tipo político que inició con el nacimiento del juicio de amparo, pero que se consolidó en las últimas décadas del siglo XX.

A principios de los años ochenta varios países latinoamericanos ya habían establecido tribunales constitucionales, pero en México apenas comenzaban a escuchar voces que hacían referencia a la necesidad de establecer instrumentos de control constitucional, en ese sentido Antonio Carrillo Flores pugnaba desde 1981 por la creación de la Ley Orgánica del artículo 105, que coadyuvara a resolver los diversos problemas que representaba la tramitación de las controversias constitucionales,⁹ lo cual resultaba evidente, pues no existía ley reglamentaria de esa figura y no quedaban claros los principios que debían seguirse ante su tramitación.

El mismo autor propuso la posibilidad de establecer una declaratoria general de inconstitucionalidad encomendada al poder judicial, pues señaló: “En

⁶ María del R. González y José A. Caballero Juárez, “Notas para el estudio del proceso de formación del Estado de derecho en México. Los modelos de Estado de la Constitución de 1917”, p. 7.

⁷ María A. García Martínez, “Justicia constitucional”, p. 958.

⁸ Manuel Aragón Reyes, “La constitución como paradigma”, p. 23.

⁹ Antonio Carrillo Flores, *La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos*, p. 43.

México deberíamos aspirar a lo mismo: las decisiones de la Suprema Corte declarando inconstitucional una ley, cualquiera que fuera el procedimiento dentro del cual se hubieran dictado, deberían comunicarse a los respectivos Congresos, publicarse en el *Diario Oficial de la Federación* y de inmediato dejar de tener vigencia en el punto concreto, como si hubiesen sido derogadas”.¹⁰ Resultaba evidente la necesidad de realizar modificaciones que permitieran volver más efectiva la figura de la controversia constitucional y la necesidad de establecer algún mecanismo para la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual llegaría en nuestro país hasta finales del siglo, mediante la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1994.

El primer paso que dio el Estado mexicano para el establecimiento de una justicia constitucional que cumpliera con la característica de ser de tipo jurisdiccional tuvo lugar en 1987, al final del periodo del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos Miguel de la Madrid Hurtado, y se llevó a cabo mediante una reforma a la Constitución que modificó el sistema de competencias en materia de amparo, haciendo una distinción entre el control de constitucionalidad y el control de legalidad, partiendo de la idea que ambos son depositados en el Poder Judicial de la Federación, pero tienen alcances diversos.

El control constitucional tiene como base el principio de la supremacía de la Constitución, según el cual ninguna norma, mandato o acto de autoridad debe estar por encima de ella, pues ésta es el origen de las instituciones mismas. Por ello, el Estado debe buscar los mecanismos para hacer valer el orden constitucional y remediar aquellos casos en que éste se vea vulnerado, observando que las autoridades no violen alguno de los preceptos establecidos en la propia Constitución al dictar alguna ley o realizar cualquier acto de autoridad. Mientras que, en el caso del control de la legalidad, se busca la protección del particular para que se le aplique correctamente la ley, en este caso podemos decir, la legislación secundaria, conforme a los principios de igualdad ante la ley, derecho de audiencia, derecho al debido proceso, derecho a la fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, etcétera.

Mediante la reforma se modificó el criterio empleado para determinar la competencia del amparo entre la Suprema Corte y los tribunales colegiados, ya que anteriormente se utilizaba como criterio la cuantía de los asuntos o la

¹⁰ *Ibid.*, p. 78.

materia de los mismos; sin embargo, con la reforma se estableció un criterio más sencillo, según el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocería de los asuntos que tuvieran relación con el control constitucional exclusivamente, y los tribunales colegiados de circuito aquellos en que se tratara del control de legalidad.

Además del nuevo criterio para la distribución de los amparos, se dispuso a la Suprema Corte contara con la facultad de atracción de cualquier asunto que correspondiera a los tribunales colegiados, siempre y cuando la propia Corte estimara que por la importancia del mismo debería ser ésta quien lo resolviera, o bien, a petición fundada del propio tribunal colegiado o del Procurador General de la República.

En la propia iniciativa de reforma se estableció de forma textual la intención de convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional y con ello avanzar en la materia garantizando el respeto irrestricto de la Constitución, pues se dispuso que la reforma “restablecerá para la Suprema Corte de Justicia su carácter de Tribunal Constitucional, perfeccionará el principio de división de poderes y contribuirá a mantener la solidez del régimen político y jurídico del país”.¹¹

Esta reforma constitucional que representa el primer paso en materia de control constitucional por parte del Estado mexicano fue publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de agosto de 1987¹² y con ello la esfera de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se limitó al conocimiento de aquellos asuntos relacionados directamente con la constitucionalidad, reservando aquellos otros que versaran sobre legalidad para otros tribunales, comenzando así el camino para equiparar a la Corte con un tribunal constitucional.

II. La reforma constitucional de 1994

Si bien la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1987 había sido el primer paso para convertir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un tribunal constitucional, aún faltaba mucho por hacer. Apenas un año después, el prestigiado jurista Héctor Fix-Zamudio se pronunció sobre el avance que representó la reforma constitucional, al tiempo

¹¹ Iniciativa de reforma constitucional del Presidente Miguel Alemán, p. 27.

¹² Edición Matutina, publicada el 10 de agosto de 1987 en *Diario Oficial de la Federación*, p. 3.

que advirtió sobre los temas que quedaban pendientes, entre los cuales destaca la declaratoria general de inconstitucionalidad, de la cual señaló que: “Se ha discutido la necesidad de implantar la declaración general de inconstitucionalidad que ya existe en otros ordenamientos latinoamericanos, así sea de manera paulatina y mediante un período de adaptación, con lo cual aumentará de manera considerable su importancia frente a los otros dos órganos del poder en nuestro sistema constitucional”.¹³

En 1994 el recién electo presidente de los Estados Unidos Mexicanos Ernesto Zedillo Ponce de León presentó el 5 de diciembre de ese año un proyecto de reforma a la Constitución relacionado con el Poder Judicial de la Federación, señalando de forma contundente la necesidad de consolidar la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un auténtico tribunal constitucional, para lo cual refirió: “Consolidar a la Suprema Corte como tribunal de constitucionalidad exige otorgar mayor fuerza a sus decisiones, exige ampliar su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales, para dirimir controversias entre los tres niveles de gobierno y para fungir como garante del federalismo”.¹⁴

En este trabajo abordaremos los elementos más importantes de esta reforma constitucional que contribuyeron al reconocimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un tribunal constitucional, como fue la integración de la misma, pues sufrió modificaciones tanto en su composición como en la forma de nombramiento de sus integrantes. De igual forma se abordará lo relativo a sus atribuciones, pues algunas le fueron retiradas, para otorgarle otras nuevas y de esa forma encomendarle los asuntos relativos a la constitucionalidad, para convertirla en una magistratura constitucional.

II.1. Integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión original de 1917 establecía una Corte integrada por 11 ministros electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral. Los primeros ministros nombrados durarían 2 años en el cargo, para dar paso a otra elección en cuyo caso los electos durarían un periodo de 4 años y finalmente, aquellos

¹³ Héctor Fix-Zamudio, “La independencia judicial en el ordenamiento mexicano”, p. 392.

¹⁴ Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, p. 3.

nombrados a partir de 1923 serían inamovibles del cargo, es decir, serían vitalicios, con lo cual se buscaba contar con una Suprema Corte de Justicia de la Nación fuerte e independiente del poder Ejecutivo, pues éste no participaría de ninguna forma en el proceso de nombramiento de los ministros, que al paso del tiempo serían inamovibles en su cargo y con ello estarían protegidos de los vaivenes políticos.

Esta Corte que se había proyectado para ser fuerte e independiente duró muy poco tiempo, pues en 1928 Álvaro Obregón presentó una iniciativa de reforma a la Constitución que planteaba el aumento de ministros, para integrar a la Suprema Corte con 16 ministros, dejando atrás la fórmula original de estar conformada por 11. Otro cambio importante tenía relación con la forma de organización de la Corte, pues el texto de 1917 establecía que ésta funcionaría únicamente en pleno, pero la reforma obregonista proponía la existencia del pleno y 3 salas, cada una integrada por 5 ministros y destinadas a la materia civil, penal y administrativa, respectivamente, en tanto que el presidente de la Corte no integraría ninguna sala. Además, establecía una duración en el periodo de los ministros, terminando así con la inamovilidad de éstos que se había establecido en el texto constitucional.

Sin duda el cambio más importante de la reforma propuesta por Obregón era la forma de nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que pasarían de ser electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio Electoral a ser nombrados directamente por el Presidente de la República con la aprobación del Senado, lo cual rompía completamente con el espíritu que los constituyentes plasmaron en el texto buscando evitar la participación del Ejecutivo, conscientes del abuso del poder que se había dado en las últimas décadas y cómo el poder Judicial, igual que prácticamente todas las instituciones, habían estado subordinadas al Ejecutivo.

Respecto de la forma de nombramiento de los ministros de la Corte la propuesta obregonista consideraba que cuando los hombres actúan en grupo pierden la noción de responsabilidad y a la hora de debatir suelen regirse más por su pasión que por la inteligencia, lo cual hacía más difícil para el Congreso de la Unión el nombramiento de los ministros, en cambio, sostenía que cuando el nombramiento era realizado por el titular del Ejecutivo: “éste pone la garantía del vivo sentimiento de su responsabilidad, y en cierto modo se solidariza con la conducta del funcionario nombrado. El requisito de la aprobación del Senado despertará en el presidente de la República una mayor atención a los méri-

tos de su candidato, apartándolo de la posibilidad de hacerlo por favoritismo o por pagar una adhesión incondicional”.¹⁵ Con lo anterior, el proyecto proponía la nueva forma de designación realizada por el Ejecutivo con la ratificación del Senado, reescribiendo las reglas para el nombramiento de los ministros. Esta reforma se publicó en el Diario Oficial el 20 de agosto de 1928.¹⁶

Esta nueva forma para el nombramiento de los ministros de la Corte estuvo vigente hasta la reforma constitucional de 1994, mediante la cual se propuso cambiar el sistema para dar paso a uno donde el Senado es quien nombra a los ministros a partir de una terna presentada por el Presidente de la República.

La finalidad de equipar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un tribunal constitucional es notoria al observar la nueva forma de nombramiento de sus integrantes, pues se abandonó el nombramiento realizado por parte del Ejecutivo, para dar paso a un mecanismo donde el ministro nombrado, si bien sería propuesto por éste, la responsabilidad del nombramiento recaía en el Senado, con lo cual se avanzaba hacia un mecanismo más equilibrado y que corresponde en mejor forma a la propuesta de Hans Kelsen al respecto, pues el padre de los tribunales constitucionales señalaba sobre la forma de nombramiento de sus integrantes que: “Entre los modos de designación particularmente típicos, no se podría pregonar sin reservas ni la simple elección por el Parlamento ni el nombramiento exclusivo por el jefe de Estado o por el Gobierno. Posiblemente se les podría combinar, haciendo, por ejemplo, elegir los jueces al Parlamento a propuesta del Gobierno, quien podría designar varios candidatos para cada puesto o inversamente”,¹⁷ lo cual corresponde cabalmente con el nuevo sistema adoptado en México.

II.2. Creación del Consejo de la Judicatura Federal

Una parte de la reforma guardó relación con las atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ésta había ido acumulando diversas actividades de carácter administrativo que no guardaban ninguna relación con la nueva actividad de justicia constitucional que se establecía con la reforma, por lo que fue necesario retirar todas esas actividades a la Corte, entre las que figuraban el nombramiento de juzgadores, así como las cuestiones adminis-

¹⁵ Proyecto de reformas constitucionales presentado por Álvaro Obregón de 18 de abril de 1928, p. 5.

¹⁶ Edición Matutina, publicada el 20 de agosto 1928 en el *Diario Oficial de la Federación*, pp. 2-3.

¹⁷ Kelsen, *op. cit.*, p. 493.

trativas y disciplinarias, por lo que la salida fue crear un órgano nuevo que se hiciera cargo todas éstas, coadyuvando así al reconocimiento del alto tribunal como uno de tipo constitucional.

De esta forma nació a la vida institucional el Consejo de la Judicatura Federal, órgano integrado por siete miembros: el presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado de los tribunales colegiados de circuito, un magistrado de los tribunales unitarios, un juez de distrito, dos consejeros designados por el Senado y uno por el presidente de la República. Esta nueva institución se haría cargo de la parte administrativa y disciplinaria del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el artículo 100 reformado de la Constitución que dispuso: “La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes”.¹⁸

No obstante, la forma en que quedó redactado el artículo 94 de la Constitución generaba algunas dudas, pues su texto incluía al Consejo de la Judicatura Federal como parte de la estructura del Poder Judicial de la Federación, pero en sentido estricto éste no era un órgano jurisdiccional. Lo anterior fue atendido mediante otra reforma a la Constitución realizada en 1999 en la cual se precisó la naturaleza del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que el texto constitucional reformado eliminó al Consejo de la primera parte del artículo 94 y se estableció un segundo párrafo que dice: “La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes”.¹⁹ Además, en el artículo 100 se estableció la naturaleza del Consejo como un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.²⁰

El nacimiento del Consejo de la Judicatura Federal como órgano administrativo y de vigilancia de la judicatura federal marcó una nueva etapa al establecerse la carrera judicial como forma para lograr el ascenso en los cargos,

¹⁸ Edición Matutina, publicada el 31 de diciembre de 1994 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 4.

¹⁹ Edición Matutina, publicada el 11 de junio de 1999 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 2.

²⁰ *Ibid.*, p. 3.

y fue tal el impacto que los poderes judiciales locales comenzaron a replicar el modelo en prácticamente todo el país.²¹ No debe perderse de vista que como señala Luis María Aguilar, el Consejo de la Judicatura contribuye al cumplimiento de ciertas condiciones necesarias para que el Poder Judicial de la Federación desarrolle sus actividades en los términos que la Constitución señala, por lo que además de la carrera judicial, el Consejo también contribuye respecto de la independencia judicial y el derecho de acceso a la justicia.²²

II.3. Atribuciones en materia de justicia constitucional

La parte central de la reforma constitucional de 1994 fue dotar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de atribuciones en materia de justicia constitucional, pues no bastaba simplemente con retirarle las actividades que la alejaban de esto, sino que debían establecerse nuevas atribuciones que se equipararan con un auténtico tribunal constitucional, lo cual ocurrió en dos sentidos, pues por una parte se establecieron los supuestos en materia de controversias constitucionales y se creó un nuevo instrumento llamado acción de inconstitucionalidad, quedando ambas instituciones previstas en el artículo 105 constitucional.

Con relación a las controversias constitucionales es necesario señalar que éstas ya habían sido establecidas en las constituciones federales del siglo XIX, como son las de 1824 y 1857, por lo que el texto de 1917 también las previó; no obstante, en todos esos casos únicamente se señalaban de forma general aquellas controversias entre estados y la federación, para lo cual se facultaba a la Suprema Corte de Justicia para resolverlas, pero no nunca se previeron a detalle los supuestos en que procedían, ni las reglas procesales mínimas para su resolución por parte de la Corte. Sin duda, la falta de una ley reglamentaria que hacía difícil la tramitación de las controversias constitucionales, al punto de que, desde el establecimiento de la Constitución de 1917 y hasta 1994 únicamente se tramitaron 42 casos de controversias constitucionales, pero más alarmante aún resulta que solamente uno se resolvió en cuanto al fondo.²³ Actualmente las controversias constitucionales pueden definirse como:

²¹ César Esquinca Muñoa, *Carrera judicial antecedentes, realidades y prospectiva*, p. 32.

²² Luis M. Aguilar Morales, *La creación y evolución del Consejo de la Judicatura Federal*, pp. 162 y ss.

²³ José de J. Orozco Henríquez, "La Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1995 y el nuevo orden constitucional", pp. 117-118.

[...] el medio de control constitucional que se tramita en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que puede ser promovido por algún nivel, poder u órgano de gobierno, con el objeto de que sea revisada la constitucionalidad de una norma general o acto concreto emitido por alguno de los dichos entes públicos, y en su caso, declarada su invalidez, por estimarse violatorio del sistema de distribución de competencias o del principio de división de poderes.²⁴

Con la reforma constitucional de 1994 se consignaron en la primera fracción del artículo 105 los supuestos en los que la Corte conocería por vía de la controversia constitucional, estableciéndose los siguientes supuestos: la federación y un estado o el Distrito Federal; la federación y un municipio; el poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquel y cualquiera de las Cámaras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o del Distrito Federal; un estado y otro; un estado y el Distrito Federal; el Distrito Federal y un municipio; dos municipios de diversos estados; dos poderes de un mismo Estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; un estado y uno de sus municipios, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; un Estado y un municipio de otro estado, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales; y dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos o disposiciones generales.

De esta forma los supuestos en que proceden las controversias constitucionales quedaron explicados de forma amplia, superando aquella simple referencia a las controversias entre la federación y los estados, para dar paso a causales más precisas y que además tuvo una novedad, como fue el caso de incluir a los municipios, que por primera vez tendrían la posibilidad de acudir ante la Corte para defenderse de los posibles abusos por parte de otras autoridades, lo cual sin duda ha resultado muy benéfico.

La esencia de las controversias constitucionales es justamente la vigilancia del ámbito de competencias en el sistema federal, para evitar posibles violaciones, contribuyendo de esa forma en la defensa de la Constitución, pues como señala Elisur Arteaga: “En virtud de la controversia, la Suprema Corte

²⁴ Suprema Corte de Justicia de la Nación, *Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de la SCJN*, pp. 16-17.

de Justicia asume las funciones de defender la Constitución, definir su sentido e impedir que los entes poderes y órganos de autoridad rebasen su campo de acción e invadan el que se asigna a otros”.²⁵ Por lo que la Corte puede invalidar los actos reclamados con efectos generales en ciertos casos y mediante el cumplimiento de algunos supuestos.

Por otra parte, la reforma constitucional de 1994 estableció una nueva institución denominada acción de inconstitucionalidad, establecida en la fracción segunda del artículo 105 de la Constitución, dichas acciones son definidas por Juventino V. Castro como:

[...] procedimientos planteados en forma de juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos legislativos minoritarios, por los partidos políticos con registro federal o estadual, o por el Procurador General de la República, en los cuales se controvierte la posible contradicción entre una norma de carácter general o un tratado internacional, por una parte, y la Constitución, por la otra, exigiéndose en el juicio la invalidación de la norma o del tratado impugnados, para hacer prevalecer los mandatos constitucionales.²⁶

Las acciones de inconstitucionalidad vinieron a llenar un vacío en el sistema jurídico, pues como ya se había anticipado desde principios de los ochenta por Antonio Carrillo y años más tarde por Héctor Fix-Zamudio, era necesario contar con la posibilidad de una declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que la reforma de 1994 permitió contar con ella. No está de más señalar que la última vez que nuestro país contó con la posibilidad de anular leyes con efectos generales fue en 1847, con el Acta Constitutiva y de Reformas.²⁷

Mediante las acciones de inconstitucionalidad se facultó a las minorías legislativas que hubieran perdido la votación para la creación de una norma, pero que en su opinión ésta fuera contraria al propio texto constitucional, en cuyo caso la Corte debería conocer y resolver el asunto conforme al artículo

²⁵ Elisur Arteaga Nava, *Manual de derecho constitucional*, p. 215.

²⁶ Juventino V. Castro y Castro, *El artículo 105 constitucional*, p. 125.

²⁷ Recordemos que durante la vigencia del Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 se estableció la figura del reclamo, mediante el cual se podían anular actos contrarios a la Constitución ya sea por el Congreso General, si se trataba de actos de legislaturas locales, o los congresos locales por mayoría, si se trataba de legislación federal, esto con la intervención de la Suprema Corte de Justicia que tenía la función de calificar la procedibilidad del recurso. Raúl Andrade Osorio, “La Suprema Corte de Justicia y el recurso de anticonstitucionalidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo”, p. 55.

105 que estableció la posibilidad de ejercitar dichas acciones dentro de los 30 días naturales siguientes a la publicación de la norma impugnada, esto por el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra de las leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión o de tratados internacionales por el Estado Mexicano; el Procurador General de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano; el equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de algunos de los órganos legislativos estatales en contra de leyes expedidas por el propio órgano, y el equivalente al treinta y tres por ciento de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia Asamblea.²⁸

Tanto a través de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aumentó sus atribuciones en materia de justicia constitucional y con ello se asemejó a los tribunales constitucionales, pues mediante estas figuras puede determinar la inconstitucionalidad de leyes y actos de las autoridades contrarios a la Constitución, para lo cual se emitió la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el *Diario Oficial de la Federación* el 11 de mayo de 1995, con lo cual se avanzó sobremanera en materia de la defensa de la Constitución, por lo que ante este importante suceso en la vida judicial del país, inició la novena época del Seminario Judicial de la Federación.

III. Reforma constitucional de 1996 en materia electoral

Desde el siglo XIX se discutió sobre la posibilidad de que el Poder Judicial de la Federación conociera de asuntos relacionados con materia electoral, esto a raíz de la llamada tesis de incompetencia de origen, según la cual los juzgadores federales podían analizar vía amparo no solamente la constitucionalidad de los actos y la competencia de la autoridad que los emitía, sino también sobre la legitimidad de la designación de la referida autoridad, todo

²⁸ Edición Matutina, publicada el 31 de diciembre de 1994 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 6.

lo cual se originó con motivo del llamado amparo Morelos, mediante el cual unos hacendados del estado de Morelos²⁹ interpusieron un amparo para evitar la aplicación de la ley de hacienda, argumentando la ilegitimidad de la autoridad que la emitía, y la Suprema Corte de Justicia presidida por José María Iglesias, promotor de esta tesis, resolvió a favor de éstos dando nacimiento a la llamada incompetencia de origen.

Aunque después de unos años, al llegar a la presidencia de la Corte Ignacio L. Vallarta promovió un criterio diverso del de su antecesor Iglesias, que hacía la distinción entre la legitimidad y la competencia, sostuvo que solamente esta última podía ser resuelta por el juez de amparo, no así la legitimidad y legalidad de una elección, pues se trataba de materia política y por ende estaba fuera de la competencia del poder Judicial, de modo que este criterio no solamente se sostuvo, sino que se fortaleció en los años siguientes. Para tener mayor claridad sobre la evolución de la justicia electoral mexicana, J. Jesús Orozco Henríquez distingue tres periodos: “1. Sistema de justicia electoral predominantemente a cargo de órgano legislativo o asamblea política (1812-1977) 2. Sistema de justicia electoral mixto a cargo de un órgano jurisdiccional y, finalmente órgano legislativo (1977-1996) 3. Sistema de justicia electoral plenamente judicial (1996 a la fecha)”.³⁰

Lo anterior nos permite comprender de dónde proviene el criterio de que en cuestiones electorales el Poder Judicial de la Federación estaba impedido, lo cual cambió radicalmente mediante la reforma constitucional de 1996 que avanzó en materia de la judicialización de la política mediante la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es cierto que ya existían tribunales electorales anteriores desde hacía algunos años, como el Tribunal de lo Contencioso Electoral de 1987, que fue el primero en establecerse, y años después el Tribunal Federal Electoral, que aunque era autónomo, sus resoluciones eran susceptibles de revisión y modificación por parte de los colegios electorales de las cámaras legislativas, por lo que esto cambió de forma importante con la creación del Tribunal Electoral que ahora depende del Poder Judicial de la Federación y sus resoluciones ya no son revisables por otra autoridad.

²⁹ Sobre el amparo Morelos puede consultarse: Manuel González Oropeza, “El amparo Morelos”, pp. 811-836.

³⁰ J. Jesús Orozco Henríquez, “Evolución del sistema mexicano de justicia electoral”, p. 337.

La reforma constitucional de 1996 resultó fundamental para transitar hacia una auténtica justicia electoral con la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que formaría parte del Poder Judicial de la Federación, sumándose así a la estructura judicial, por lo que el artículo 94 constitucional fue modificado para incorporar un Tribunal Electoral.³¹ Pero también implementó un cambio muy importante en materia de las acciones de inconstitucionalidad establecidas en la reforma constitucional de 1994, pues éstas habían recibido muchas críticas al no permitirse su ejercicio para impugnar leyes electorales, lo cual generaba una consecuencia negativa al limitar la materia, por lo que se eliminó dicha restricción para permitir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las acciones de inconstitucionalidad en materia electoral, incorporándose el inciso k) de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, que permitió la presentación de éstas a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales federales y locales; y a los partidos con registro estatal contra leyes electorales expedidas por el legislador local.³²

IV. Las reformas constitucionales de 2011

En 2011 se llevaron a cabo dos reformas constitucionales que resultan importantes para comprender el desarrollo de la justicia constitucional, pues abarcaron aspectos muy sensibles como son el amparo y los derechos humanos. La primera de las reformas fue en materia de amparo y se publicó el 6 de junio, luego de más de dos años que tomó el proceso legislativo hasta llegar a su publicación en el *Diario Oficial de la Federación*.

Uno de los cambios que trajo consigo la reforma fue el establecimiento de la posibilidad de protección vía amparo no solamente de las disposiciones constitucionales, sino que se amplió a los tratados internacionales, por lo que la fracción primera del artículo 103 reformado establece: “Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta

³¹ Edición Matutina, publicada el 22 de agosto de 1996 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 5.

³² *Id.*

Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”.³³

Esta reforma también introdujo el reconocimiento del interés legítimo, con lo cual el espectro protector del amparo se amplió al no quedar limitado al interés jurídico, con lo cual se transitó hacia una nueva concepción del juicio de amparo en México, quedando la fracción I del artículo 107 de la siguiente forma: “I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico”.³⁴

Finalmente, la reforma de 2011 en materia de amparo abrió la puerta a la declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que a pesar de mantenerse vigente la fórmula Otero, la fracción II del artículo 107 dispuso:

Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente.

Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos ocho votos, la declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria.³⁵

Estos cambios en materia de amparo obligaron a reformar la ley, por lo que en abril de 2013 se publicó la *Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artícu-*

³³ Edición Matutina, publicada el, 6 de junio de 2011 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 3.

³⁴ *Id.*

³⁵ *Id.*

los 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,³⁶ misma que tardó cerca de dos años en ser publicada.

En tanto que la segunda reforma constitucional guardó relación con los derechos humanos, misma que inició en 2009 con la aprobación del dictamen por parte de la Cámara de Diputados, el cual tenía como antecedentes numerosas propuestas de diputados y una del Ejecutivo federal en 2004.³⁷ Por lo que luego de poco más de dos años concluyó el proceso mediante la publicación en el *Diario Oficial de la Federación* el 10 de junio de 2011, siendo una de las más importantes que ha experimentado la Constitución en los últimos años, por la profundidad de sus postulados que establecieron un nuevo paradigma en la materia que ha obligado a todos a repensar los derechos humanos y sus implicaciones.

Mediante esta reforma, el artículo primero de la Constitución quedó establecido de la siguiente forma:

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

³⁶ Edición, publicada el 2 de abril de 2013 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 1.

³⁷ Sergio García Ramírez, "Hacia una nueva regulación constitucional sobre derechos humanos (2009-2011)", p. 817.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.³⁸

Son muchos los cambios que significó esta nueva redacción del artículo primero constitucional, entre los que podemos señalar el nuevo concepto de derechos humanos y sus garantías, con lo que quedaron en el pasado las otras llamadas garantías individuales. De igual forma, la nueva redacción dejó de lado el otorgamiento de los derechos, para dar paso a su reconocimiento, acercándose más a aquella concepción jusnaturalista del texto constitucional previo en el siglo XIX. Uno de los cambios más significativos de la reforma fue la incorporación del principio pro persona, con el cual se busca favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia.

Ante la trascendencia de las reformas constitucionales de junio de 2011, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio del acuerdo 9/2011 del 29 de agosto de ese mismo año, acordó integrar la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación*, a partir del 4 de octubre de 2011, dando fin a la Novena Época que comenzó con motivo de la reforma constitucional de 1994.

Las reformas de 2011 y todas las demás que ha experimentado la Constitución en la materia han contribuido, como refiere María del Pilar Hernández, para que: “El Máximo Tribunal del Estado mexicano se convierta, finalmente, no sólo en garante de la regularidad constitucional sino, ante todo, como lo ha expresado el ministro Luis María Aguilar: de la defensa irrestricta y promoción de los derechos humanos, aspiración de nuestro Constituyente de Querétaro hecha realidad”.³⁹

³⁸ Edición matutina publicada el 10 de junio de 2011 en el *Diario Oficial de la Federación*, p. 2.

³⁹ María del P. Hernández, *El poder judicial federal en México dimensión histórica e institucional en los debates de 1917*, p. 42.

V. *Reforma constitucional de 2024*

El 5 de febrero de 2024 el presidente de los Estados Unidos Mexicanos presentó una iniciativa para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del poder Judicial, a través de la cual se propuso un nuevo sistema para el nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados de circuito y jueces de distrito, proponiendo que fueran electos por voto popular, y con la característica de que estos elementos se replicarían en los poderes judiciales de los estados de todo el país, lo que reescribiría las bases para el nombramiento de la judicatura en México.

Esta reforma ha generado opiniones encontradas en torno a los efectos que tendrá. Para este trabajo señalaremos el cambio que generó la misma en relación con el nombramiento de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, pues esto guarda relación directa con la justicia constitucional al tratarse de la magistratura constitucional, por lo que nos limitaremos a exponer el contenido de la reforma, para lo cual es necesario tomar en cuenta que se trata de una reforma de gran calado que modificará sobremanera la forma en que se ha venido desarrollando la selección y asignación de personas juzgadoras en México por lo menos en los últimos 30 años, cuando operó la reforma constitucional de diciembre de 1994.

En ese sentido, la propuesta de reforma establece que respecto del nombramiento de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos dejarán de ser nombrados por el Senado a propuesta en terna presentada por el titular del Ejecutivo federal, para dar paso a una elección por voto directo de los ciudadanos, con candidatos propuestos por los tres poderes, a razón de 10 candidatos por cada poder,⁴⁰ y lo mismo operaría para los juzgadores federales y locales, pero con un menor número de candidatos, a razón de un 33.3% por cada uno.

La reforma se publicó en el *Diario Oficial de la Federación* el 15 de septiembre de 2024, y además del cambio en la forma de nombramiento de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, operaron otros cambios importantes que vale la pena mencionar, por ejemplo, lo relativo a la administra-

⁴⁰ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial. Iniciativa de reforma constitucional, p. 45.

ción del poder judicial, pues desaparece el Consejo de la Judicatura Federal que había nacido con la reforma de 1994, y en su lugar se crearán dos instituciones nuevas, una para la cuestión administrativa y otra para la disciplinaria, pues señala el párrafo segundo del artículo 94 constitucional: “La administración del Poder Judicial de la Federación estará a cargo de un órgano de administración judicial, mientras que la disciplina de su personal estará a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes”.⁴¹

Por otra parte, la integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se modifica y conforme al tercer párrafo del mismo artículo 94 queda integrada con nueve ministros, separándose del número original de ministros que se estableció en el texto constitucional en 1917, para establecerse el número de ministros que tuvo la Constitución federal de 1857.

Además, con la reforma se eliminan las salas en las que se dividía la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que a partir de la reforma sesionará únicamente en pleno, con lo cual se modifica radicalmente no solo la forma de nombramiento de sus integrantes, sino también la forma de trabajo del Alto Tribunal, que debemos recordar, fue establecida para efecto de hacer frente al rezago que se dio en la Corte y atender los asuntos de forma más especializada.

El 03 de septiembre de 2025 tomaron posesión los integrantes de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en esa misma fecha, mediante el Acuerdo General Número 7/2025 (12a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio inicio la duodécima época del *Semanario Judicial de la Federación* bajo el nombre: “De la Justicia Pluricultural, la Igualdad Sustantiva y la Inclusión en México”.⁴²

Estos son algunos de los cambios recientes que sufrió la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2024, los cuales se han aplicado en 2025, por lo que nos encontramos todavía en el proceso de transición, de modo que este trabajo se limita a exponer algunos de los cambios que ésta tra-

⁴¹ Edición Vespertina, publicada el 15 de septiembre 2024 en el *Diario oficial de la Federación*, p. 3.

⁴² Acuerdo general número 7/2025 (12a.) del pleno de la suprema corte de justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, por el que se determina, el inicio del tercer periodo denominado “de la justicia del pueblo” y la duodécima época del *Semanario Judicial de la Federación* denominada “de la justicia pluricultural, la igualdad sustantiva y la inclusión en México” y se establecen sus bases.

jo consigo, en el marco evolutivo del Poder Judicial de la Federación, lo cual seguirá siendo motivo de discusión durante los próximos años.

Para concluir, podemos señalar que, en estos cuarenta años de evolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resulta evidente cómo a finales de la década de los 80 comenzó un proceso de transformación de ésta, que en pocos años la convirtió en un tribunal constitucional, al menos en sentido material, por lo que se consolidó no solamente como el órgano jurisdiccional de mayor jerarquía en México, sino en el auténtico guardián de la Constitución, por lo menos durante las últimas tres décadas, por lo que la forma de nombramiento de sus integrantes se ajustó al modelo planteado por Kelsen, en el sentido de que fuera el Legislativo quien los nombre, a propuesta del Ejecutivo.

Lo anterior entendido exclusivamente para la cabeza del Poder Judicial de la Federación, como es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues en lo que respecta al resto de la judicatura federal, el sistema fue diverso y prácticamente no tuvo cambios durante el siglo XX, ya que desde la promulgación de la Constitución de 1917 quedó claro que el nombramiento de los jueces y magistrados recaería en el propio Poder Judicial de la Federación, situación que no cambió, aunque sí se fortaleció al incorporar la carrera judicial mediante la reforma constitucional de 1994, lo que coadyuvó para lograr un poder judicial altamente especializado y profesional, pero sobre todo, separado de los otros dos poderes, lo cual resulta fundamental para garantizar una auténtica independencia.

No está de más señalar que por la naturaleza propia de las funciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, tanto los requisitos, como la forma de asignación para el encargo siempre fue diferente para los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que para el resto de la judicatura, lo cual resulta lógico, pues es evidente que en tratándose del Alto Tribunal, se advierten elementos políticos ineludibles, pero respecto del grueso de la judicatura federal, se priorizó en los últimos años la necesaria carrera judicial, que más allá de filias y fobias, garantizó que quienes accedían al cargo, contaran con la experiencia para el desempeño de las funciones.

Sin la distancia suficiente para valorar adecuadamente los efectos de la reforma constitucional de 2024 en materia del Poder Judicial de la Federación, nos preocupan dos elementos fundamentalmente, el primero es que se haya homologado el sistema para el nombramiento de sus integrantes, pues básica-

mente es el mismo para ser juez en algún tribunal estatal, federal o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual resulta complicado de entender en la práctica, pues los niveles de habilitación necesarios son diversos, al existir una marcada diferencia entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional.

El segundo elemento es la participación política en el nombramiento de la judicatura, pues si bien es cierto que el sentido de la reforma es que se elija mediante elección popular, lo cual de por sí resulta bastante polémico, no debe perderse de vista que en este sistema la designación de los aspirantes cuenta con una participación determinante de los poderes Legislativo y Ejecutivo, que ante la presencia de una fuerza política predominante, representan varios peligros, por lo que debemos tener cuidado del riesgo que significa transitar de la judicialización de la política a la politización de la justicia. No olvidemos que la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como de la judicatura en general, es en gran medida una actividad técnica cuya legitimidad no deriva necesariamente de la forma de nombramiento de sus integrantes, pues su función no es representar a nadie, sino impartir justicia a los casos concretos y defender la Constitución.

Fuentes de consulta

Bibliográficas

- Aguilar Morales, Luis María. *La creación y evolución del Consejo de la Judicatura Federal*. México, SCJN, 2016.
- Andrade Osorio, Raúl. “La Suprema Corte de Justicia y el recurso de anticonstitucionalidad del Tratado de Guadalupe Hidalgo”. *Historia jurídica estudios en honor al profesor Francisco de Icaza Dufour*, Pablo Hernández-Romo Valencia y Rafael Estrada Michel (coords.), México, Tirant lo Blanch, 2013, pp. 29-58.
- Aragón Reyes, Manuel. “La constitución como paradigma”. *Memoria del simposio internacional El significado actual de la de la constitución*, México, IJJ-UNAM, 1998, pp. 19-32. <http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9104>
- Arteaga Nava, Elisur. *Manual de derecho constitucional*. México, Oxford, 2016.
- Bazán, Víctor. *Jurisdicción constitucional y control de constitucionalidad de los tratados internacionales un análisis de derecho comparado*. México, Porrúa, 2003.
- Carrillo Flores, Antonio. *La Constitución, la Suprema Corte y los derechos humanos*. México, Porrúa, 1981.

- Castro y Castro, Juventino V. *El artículo 105 constitucional*. 4ª ed., México, Porrúa, 2001.
- Esquinca Muñoa, César. *Carrera judicial antecedentes, realidades y prospectiva*. México, Porrúa, 2016.
- Ferrer Mac-Gregor, Eduardo. “Los tribunales constitucionales y la Suprema Corte de Justicia en México”. *Derecho procesal constitucional*. Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), 5ª ed., T. I, México, Porrúa, 2006, pp. 233-267.
- Fix-Zamudio, Héctor. “La independencia judicial en el ordenamiento mexicano”. *Derecho constitucional comparado: México-Estados Unidos*. James Frank Smith (coord.), T. I, México, IIJ-UNAM y Facultad de Derecho de la Universidad de California en Davis, 1988, pp. 379-398.
- García Belaunde, Domingo. “De la jurisdicción constitucional al derecho procesal constitucional”. *Derecho procesal constitucional*, Eduardo Ferrer Mac-Gregor (coord.), 5ª ed., T. I, México, Porrúa, 2006, pp. 303-341.
- García de Enterría, Eduardo. *La constitución como norma y el tribunal constitucional*. 3ª ed., Madrid, Civitas, 2001.
- García Martínez, María Asunción. “Justicia constitucional”. *Diccionario histórico judicial de México: ideas e instituciones*, T. II, México, SCJN, pp. 958-966.
- González Oropeza, Manuel. “El amparo Morelos”. *Estudios en homenaje a Jorge Barraza Graf*. T. II, México, IIJ-UNAM, 1989, pp. 811-836. <http://ru.juridicas.unam.mx/xmlui/handle/123456789/9615>
- González, María del Refugio y José Antonio Caballero Juárez. “Notas para el estudio del proceso de formación del Estado de derecho en México. Los modelos de Estado de la Constitución de 1917”. *Constituciones históricas de México*. Miguel Carbonell et al., (coords.), Mexico, Porrúa-UNAM, 2004, pp. 3-50.
- Hernández, María del Pilar. *El poder judicial federal en México dimensión histórica e institucional en los debates de 1917*, México, SCJN, 2016.
- Kelsen, Hans. *La garantía jurisdiccional de la constitución (la justicia constitucional)*. Rolando Tamayo y Salmorán (trad.), México, IIJ-UNAM, 2001.
- Orozco Henríquez, J. Jesús. “Evolución del sistema mexicano de justicia electoral”. *El derecho en México: dos siglos (1810-2010)*, Sergio García Ramírez (coord.), T. VI. México, Porrúa, IIJ-UNAM, pp. 337-390.
- . “La Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de 1995 y el nuevo orden constitucional”. *Décimo aniversario de la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación*, México, SCJN, 2005, pp. 113-140.
- Suprema Corte de Justicia de la Nación. *Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad análisis de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, a partir de los criterios de la SCJN*. México, SCJN, 2009.

Hemerográficas

- García Ramírez, Sergio. “Hacia una nueva regulación constitucional sobre derechos humanos (2009-2011)”. *Boletín Mexicano de Derecho Comparado*, Núm. 131, ma-

yo-agosto 2011, México, IIJ-UNAM, pp. 817-840. <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-comparado/issue/view/164>

Legislación

Acuerdo general número 7/2025 (12ª.) del pleno de la suprema corte de justicia de la Nación, de tres de septiembre de dos mil veinticinco, por el que se determina, el inicio del tercer período denominado “de la justicia del pueblo” y la duodécima época del semanario judicial de la federación denominada “de la justicia pluricultural, la igualdad sustantiva y la inclusión en México” y se establecen sus bases, publicado el 3 de septiembre de 2025 en el *Semanario Judicial de la Federación*. <https://www.internet2.scjn.gob.mx/Flip/agp072025/>.

Iniciativa con Proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma al Poder Judicial, publicada el 05 de febrero de 2024 en la *Gaceta Parlamentaria*, Núm. 6457-15. <https://gaceta.diputados.gob.mx/PDF/65/2024/feb/20240205-15.pdf#page=2>

Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León, año 1º, Periodo Ordinario, Sección 1ª, Núm. 21, 5 diciembre de 1994.

Iniciativa de reforma constitucional del Presidente Miguel Alemán, año 2º, Sección 1ª, Núm. 142.

Proyecto de reformas constitucionales presentado por Álvaro Obregón de 18 de abril de 1928, publicado el 14 de mayo de 1928 en el *Diario de los Debates*, Núm. 3, Legislatura XXXII.

Edición Matutina, publicada el 20 de agosto 1928, en el *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 40, T. XLIX. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1928&month=08&day=20#gsc.tab=0

_____, publicada el 10 de agosto de 1987 en *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 6, Tomo CDVII. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1987&month=08&day=10#gsc.tab=0

_____, publicada el 31 de diciembre de 1994 en el *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 22, T. CDXCV. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1994&month=12&day=31#gsc.tab=0

_____, publicada el 22 de agosto de 1996 en el *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 16, T. DXV. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1996&month=08&day=22#gsc.tab=0

_____, publicada el 11 de junio de 1999 en el *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 9, T. DXLIX. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=1999&month=06&day=11#gsc.tab=0

_____, publicada el 6 de junio de 2011 en el *Diario Oficial de la Federación*, T. DCXCIII, Núm. 4. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2011&month=06&day=06#gsc.tab=0

_____, publicada el 10 de junio de 2011 en el *Diario Oficial de la Federación*, Núm. 8, T. DCXCIII, https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2011&month=06&day=10#gsc.tab=0

Edición Vespertina, publicada el 15 de septiembre 2024 en el *Diario oficial de la Federación*, Núm. 14. https://www.dof.gob.mx/index_113.php?year=2024&month=09&day=15#gsc.tab=0

